

El medio ambiente bajo la guerra **GREENPEACE MÉXICO**

Como un "efecto dominó" tardío, la oleada de insurrecciones populares centroamericanas llegó al sureste de México con por lo menos diez años de retraso. Empero, este lapso puede significar para Chiapas la diferencia entre la salvación o la completa aniquilación de su ambiente natural.

Las desastrosas consecuencias ambientales de las guerras contrainsurgentes perpetradas en Guatemala y El Salvador durante la década de los 80, así como en el largo conflicto bélico nicaragüense, deberían ser un ejemplo para evitar un ecocidio en la selva chiapaneca.

Y aunque en una situación de guerra lo último en lo que piensa la gente es en cuestiones ambientales, es claro que al romperse el equilibrio ecológico de una región, se rompe también con las posibilidades de vida de los grupos humanos ahí asentados.

Por eso, haremos enseguida un repaso de los altísimos costos ambientales que los países centroamericanos están pagando al haber soslayado sus gobiernos el principio fundamental del respeto al entorno natural en situaciones de conflicto bélico.

Vietnam, Apocalipsis ahora

La guerra ambiental, es decir, la destrucción del terreno, de cosechas o de ecosistemas completos, ha sido una táctica militar desde tiempos remotos. Y a medida que la tecnología se ha sofisticado, las consecuencias ecológicas de las operaciones militares se han vuelto cada vez más graves, ya sea como resultado de la destrucción estratégica del medio ambiente o simplemente como resultado de los combates.

El ejemplo contemporáneo más claro de los impactos ambientales de las conflagraciones armadas es la guerra de Vietnam. Incluso, el daño que se hizo al entorno natural del país asiático empujó a los expertos a acuñar el término "ecocidio" para describir la devastación ocurrida.

El gobierno estadounidense empleó en Vietnam una política de "tierra arrasada" que destruyó deliberadamente el medio ambiente natural, con el objetivo de impedir que los guerrilleros vietnamitas se ocultaran y a fin de separarlos de su base social. Como consecuencia de esta estrategia, entre la cuarta parte y la mitad de la superficie de Vietnam sufrió defoliación en algún momento de la guerra.

Durante las décadas de 1960 y 1970, vastas áreas de bosques tropicales, manglares (41 por ciento) y tierras agrícolas (17 mil kilómetros cuadrados) fueron víctimas de armas químicas tales como napalm (alrededor de 100 mil toneladas; una sola tonelada de este combustible gelatinoso hace arder, en segundos, una superficie equivalente a un campo y medio de fútbol), fósforo blanco y herbicidas (72 millones de litros), entre

los que destacó el Agente Naranja. La aviación estadounidense arrojó 13 millones de toneladas de bombas, que dejaron el suelo marcado con 25 millones de cráteres, desplazaron 3 mil millones de metros cúbicos de suelo, y causaron problemas en la salud humana y en el flujo natural de las aguas.

Dos millones de vietnamitas murieron durante la guerra; cientos de miles más están sufriendo algún tipo de cáncer y otras enfermedades, en tanto que miles de niños - vietnamitas y estadounidenses- han venido al mundo con defectos de nacimiento, provocados por las sustancias químicas utilizadas durante el conflicto.

Esta trágica historia de destrucción ambiental se repitió con frecuencia en años recientes, durante los bombardeos estadounidenses en El Salvador, los ataques de los "contras" a objetivos sandinistas en Nicaragua, en la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán, la Guerra del Golfo, y otros conflictos bélicos similares.

Crear dos, tres... muchos Vietnam

La derrota en Vietnam obligó a Estados Unidos a buscar la manera de alcanzar los objetivos de contrainsurgencia sin involucrar directamente a sus tropas. Esta estrategia, comúnmente llamada por el Pentágono "Guerra de Baja Intensidad" (GBI), es un intento de ganar la guerra sin tener que pelear ni una batalla. Fue esta modalidad la que el gobierno estadounidense aplicó durante su intervención en Centroamérica.

Bajo la premisa de que la población civil es a la guerrilla lo que el agua al pez y, por lo tanto, si se quiere acabar con el pez basta con retirarle el agua, la GBI combina los elementos militares con otro tipo de actividades (políticas, económicas, de inteligencia, operaciones psicológicas, control de la población) para neutralizar o destruir las bases de apoyo de la insurgencia. En este sentido, la GBI enfoca su estrategia operativa hacia la población civil, haciendo de ésta un objetivo militar.

En El Salvador, ésta fue la política contrainsurgente empleada por las Fuerzas Armadas, con apoyo de la administración Reagan, en su lucha contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La fuerza aérea salvadoreña arrojó sobre la población civil más de 3 mil toneladas de bombas de fabricación estadounidense, matando a por lo menos 2 mil personas. Un 20 por ciento de los salvadoreños tuvieron que huir de sus casas ante el avance del ejército. En la provincia norteña de Chalatenango, los bombardeos del gobierno destruyeron bosques y campos agrícolas, haciendo imposible trabajar la tierra. Hacia el sureste, en la provincia de San Vicente, el bombardeo de campos agrícolas creó una aguda crisis de alimentos, privando a los campesinos de maíz, frijol y arroz.

El paisaje salvadoreño también muestra las cicatrices de las bombas de napalm y de fósforo blanco. La guerra provocó, además, incendios forestales en bosques de pinos y robles. Muchos de estos bosques no se pudieron regenerar después de los incendios, convirtiéndose en rastrojos. La subsecuente erosión del suelo y las tormentas de polvo

causan acumulación de sedimentos, contaminación y desecación de fuentes naturales de agua.

En Guatemala, las fuerzas armadas destruyeron bosques, campos de cultivo, ganado y por lo menos 440 poblados, en un lapso de 5 años, desplazando a más de un millón de guatemaltecos dentro de su mismo país. Según reportes de especialistas, la destrucción de los bosques provocó alteraciones en los microclimas, mientras que la temperatura en las zonas devastadas está aumentando.

Además de la política de arrasar la tierra, el ejército construyó una serie de caminos en áreas remotas, en su intento por combatir a la guerrilla insurgente. Esta táctica destruyó los bosques tanto a lo largo de los caminos como cerca de las poblaciones. Asimismo, el ejército reubicó a los indígenas desplazados en "villas modelo" (versión guatemalteca de los "caseríos estratégicos" vietnamitas) en las tierras altas.

Honduras, por su parte, no ha enfrentado una insurrección civil, pero la utilización de su territorio como base militar por Estados Unidos para sus operaciones en el área, así como la presencia de 20 mil refugiados nicaragüenses, 15 mil integrantes de la "contra" antisandinista y otra cantidad importante de salvadoreños en la otra frontera hondureña, causaron un innegable impacto ambiental.

La destrucción ecológica resultante incluyó tala y quema forestal para agricultura de subsistencia, áreas boscosas desmontadas para establecer bases de la "contra", mercado negro para exportación de joros y para la explotación ilegal de maderas preciosas como caoba, cedro y pino. Los incendios forestales también aumentaron. Las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Honduras destruyeron el 10 por ciento del bosque de pinos del país, en las sabanas cercanas a la frontera con Nicaragua.

En la patria de Sandino, los "contras" del Frente Democrático Nicaragüense centraron sus ataques sobre los conservacionistas y sus proyectos de campo. Durante tres años, por ejemplo, asesinaron o secuestraron a 75 conservacionistas y empleados del Instituto de Recursos Naturales de Nicaragua (IRENA). También quemaron áreas de reforestación y destruyeron viveros, vehículos y oficinas. Pero mayor aún fue la devastación causada por los efectos indirectos de la guerra: los gastos de defensa absorbían más del 40 por ciento del presupuesto nacional nicaragüense.

Chiapas, la cara de la guerra

Aunque en Chiapas sólo se produjeron combates directos entre el ejército federal y los sublevados zapatistas durante las dos primeras semanas del conflicto, la forma en que el gobierno mexicano decidió encarar el asunto a principios de 1995, hace presagiar una situación de guerra en esa entidad, con los consecuentes impactos sociales y ambientales en una zona particularmente rica -y a la vez muy frágil- en recursos naturales.

En efecto, luego de una prolongada pausa, el 9 de febrero de 1995 la Procuraduría General de la República giró órdenes de aprehensión contra los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en tanto que el presidente Ernesto Zedillo ordenó el avance del ejército federal para "recuperar" los territorios controlados por el EZLN y coadyuvar en la búsqueda de los líderes guerrilleros. La ocupación militar provocó que por lo menos 20 mil personas huyeran de sus hogares para refugiarse en las montañas cercanas> en condiciones bastante precarias.

Ante las protestas surgidas en el país y en varias partes del mundo, el gobierno mexicano tuvo que reconsiderar su decisión y ordenó una salida parcial del ejército de los poblados ocupados.

Como ha ocurrido en otras regiones afectadas por conflictos armados, una delegación internacional de Greenpeace viajó a Chiapas a principios de marzo, para "ser testigo y dar testimonio" de una situación que amenaza a la convivencia pacífica de grupos humanos con su entorno.

Aparte de las numerosas denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército federal que recabó Greenpeace, lo más importante fue constatar que existen serias evidencias de que para combatir al EZLN, el ejército mexicano está aplicando en Chiapas elementos de una estrategia de Guerra de Baja Intensidad. Es decir que, en los hechos, la población indígena chiapaneca es un objetivo militar.

Cómo explicar si no, el vandalismo y la violencia física y psicológica contra personas, bienes y costumbres. Cómo interpretar entonces la intensa y sistemática campaña publicitaria para hacer aparecer la presencia del ejército como una "ocupación pacífica y de servicio social". Cómo juzgar los rumores intimidatorios esparcidos intencionalmente entre las comunidades. Cómo calificar, en fin, los caminos y brechas que el ejército está abriendo hacia el interior de la selva, en los límites de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Agua Azul y Perla de Acapulco).

La operación militar se produjo justo en la época en que los campesinos deberían estar cosechando el frijol y el café y preparando la tierra para la siembra del maíz. Al no haberse podido llevar a cabo estas tareas, la región se verá expuesta a una enorme carencia de alimentos en el curso de los próximos meses, exponiendo a la población a hambrunas y sustituyendo las prácticas de autosubsistencia campesina por la dependencia de la ayuda gubernamental.

Todo parece indicar que existe la intención de minar la capacidad de resistencia de las comunidades, agudizar la división y fomentar el enfrentamiento entre la población.

Si con esta actitud el gobierno mexicano está apostando a estrangular al EZLN mediante el cerco por hambre y miedo a sus bases de apoyo, en lugar de buscar soluciones de fondo que reviertan las causas históricas de explotación y miseria que obligaron a indígenas y campesinos a levantarse en armas, cuidado.

Tomar esa ruta conducirá, sin duda, a una prolongación indefinida del conflicto, en la que seguir recurriendo a elementos de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad será una fuerte tentación y entonces sí, se entrará al callejón sin salida de los ecocidios cometidos en los países centroamericanos.